República de Colombia

Rama Judicial

JUZGADO OCHENTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C., CONVERTIDO EN JUZGADO 63 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTA

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinte

Proceso: Ejecutivo
Demandante: MONICA PATRICIA MARTINEZ
Demandado: JOSE ORLANDO ACOSTA CIFUENTES
Radicación: 2018-0917
Asunto: Recurso de Reposición en Subsidio de Apelación

I. ASUNTO POR TRATAR

Resuelve el despacho el recurso de reposición en subsidio de apelación, interpuesto por el extremo ejecutante contra el auto proferido el pasado 16 de octubre de 2020 (fl. 44), mediante el cual el Despacho declaró el desistimiento tácito del proceso, decretando su terminación.

II. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

Argumentó la recurrente que acató lo dispuesto por el Despacho en auto del 26 de noviembre de 2019 (fl. 28), enviando el mandamiento de pago debidamente cotejado por la compañía de notificaciones el 13 de diciembre de 2019.

Afirmó que, el auto del 13 de febrero de 2020, no tuvo en cuenta la notificación por aviso realizada, por eso procedió a realizar nuevamente el aviso judicial el día 2 de marzo hogaño por la compañía de notificaciones y el día 25 junio de 2020 por correo electrónico.

Indicó que no pudo allegar el cotejo de esta notificación, por motivo de la pandemia que atravesamos, entonces, con la presentación del presente recurso anexa el mandamiento de pago debidamente cotejado, los pantallazos de la notificación realizada por medio electrónico y liquidación de crédito presentada.

Manifestó que, notificó en legal forma a la ejecutada, además, que los acuerdos emanados por el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministro de Salud, se decretó emergencia nacional en todo el territorio colombiano hasta el 31 de agosto del presente año.

Por lo anterior, peticionó reponer el auto del 16 de octubre de 2020, y en su lugar se continúe con el trámite que corresponda.

III. CONSIDERACIONES

Por sabido se tiene que el recurso de reposición busca que el mismo funcionario que profirió la decisión, vuelva sobre ella para que analice su legalidad y en caso tal revoque, modifique, o adicione, cuando quiera que haya incurrido en errores in procedendo, o in judicando.

Liminalmente debe decirse, que el estatuto procesal civil ha establecido un conjunto de cargas, cuyo cumplimiento siempre queda al arbitrio de quien la tiene, pero cuyo desentendimiento genera en la mayoría de los casos, sino lo es en todos, una consecuencia adversa a sus intereses, *"… como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso…"*[1], *"…dado que el sometimiento a las normas procedimentales o adjetivas, como formas propias del respectivo juicio, no es optativo para quienes acuden al mismo con el objeto de resolver sus conflictos jurídicos, en tanto que de esa subordinación depende la validez de los actos que de ellas resulten y la efectividad de los derechos sustanciales…"*[2].

Y es que *"…las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables…"*[3].

En ejercicio de los poderes de que está investido como director del proceso, el Juez requerirá a las partes o intervinientes para que cumplan sus cargas procesales o ejecuten el acto pertinente a efectos de proseguir el trámite de la demanda, la denuncia del pleito, llamamiento en garantía, incidente, o cualquier otra actuación que estas hubieren promovido, a lo cual deberán proceder dentro de los treinta días siguientes, so pena que quede sin efecto la demanda o solicitud, y se declare la terminación del proceso.

Sin duda, el desistimiento tácito consagrado en el artículo 317 de la Ley 1564 de 2012[4], viene a suplir el vacío dejado por la derogatoria de la Ley 1194 de 2008[5] y se erige en un instrumento eficaz en orden a prevenir la paralización de los litigios civiles y su injustificada permanencia en el tiempo. Se trata pues de verificar si el litigante que ha sido requerido para que cumpla la carga procesal o ejecute el acto señalado lo ha hecho dentro del término establecido, para, de no ser así, proceder a finiquitar la actuación con sus consecuentes efectos.

En el sub-judice, en el inciso 2 del auto calendado el 26 de noviembre de 2019 (fl.28) se requirió al ejecutante para que en el término de treinta días adelantara las gestiones tendientes a la notificación del ejecutado –JOSE ORLANDO ACOSTA CIFUENTES-, so pena de dar aplicación a la sanción contenida en el artículo 317 del CGP.

---

1. Cfr. Sala de Casación Civil, auto del 17 de septiembre de 1985; Gaceta Judicial Tomo CLXXX, No. 2419, página 427.
2. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia 1512 de 2000.
3. Cfr. Ibídem nota al pie 1.
4. Código General del Proceso
5. Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Civil y se dictan otras disposiciones

En auto del 13 de febrero de 2020 (fl.36) no se tuvo en cuenta la notificación por aviso realizada al ejecutado (fls.30-35), toda vez que se indicó erradamente la dirección de este estrado judicial en el citatorio y en el aviso remitido, por tanto, se ordenó a la secretaría de esta Judicatura contabilizar nuevamente el término otorgado en el numeral 2 del auto calendado el 26 de noviembre de 2019.

A través de correo electrónico del 25 de junio de 2020, la apoderada de la parte ejecutante allegó el aviso remitido (art. 292 del CGP) (fls. 37-43); omitiendo allegar copia del citatorio que hubiere enviado (art. 291 ibídem), por eso, en el numeral 2 del auto calendado el 16 de octubre de 2020 (fl.44) se decretó el desistimiento tácito de la presente acción ejecutiva.

Luego, es palmario concluir que a pesar del requerimiento realizado a la parte demandante por parte de este Despacho, este, no cumplió dentro del término estipulado para adelantar las diligencias allí exigidas, que era vincular al proceso al ejecutada por cualquiera de los medios establecidos por el Estatuto Procesal para tal fin, por lo que en esta dirección, se colige el acierto de la decisión atacada, al declarar el desistimiento tácito de este trámite, lo que conlleva que los fundamentos de la inconformidad no resulten admisibles jurídicamente, cuando es palmaria la falta de diligencia en cuanto la actuación que ordenó adelantarse, lo cual, valga resaltar es de su exclusivo resorte.

Así las cosas, todo estaba dado para que la presente actuación terminara por desistimiento tácito, a la luz de lo previsto en la norma procesal atrás referida, tal como se dispuso en el auto cuestionado.

De hecho, porque al realizarse el requerimiento al extremo demandante en el numeral segundo del auto adiado el 26 de noviembre de 2019 (fl. 28), transcurrió el término concedido sin que el ejecutante cumpliera con las cargas impuestas, pues lo cierto es que, el expediente permaneció en la secretaría por un lapso superior a ese término, sin que el demandante, se insiste, atendiera las cargas procesales señaladas.

Además, porque la terminación del proceso por desistimiento tácito no se encuentra al arbitrio del juez, quien debe disponerla una vez se verifiquen los presupuestos del artículo 317 del Código General del Proceso.

Al respecto, es importante recordar que la parte que descuida o abandona un proceso incumple uno de sus deberes constitucionales, cual es el de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia; puesto que desatiende las cargas y deberes que los códigos de procedimiento le imponen, amén de que impide el adecuado y oportuno cumplimiento de las formas propias de cada juicio (artículo 29 C. Política), en el caso de la notificación del auto admisorio o del mandamiento de pago, el ejercicio de esa misma garantía por parte de los demandados, lo mismo que de su derecho de acceder a la administración de justicia (artículos 29 y 229 ib.), provoca la infracción de claros principios de la administración de justicia, como los de eficiencia, eficacia, economía y celeridad (artículo 228 C. Pol. y Ley 270/96).

Epílogo de lo expuesto, es claro que la decisión censurada se encuentra ajustada a derecho, no siendo entonces de recibo los argumentos traídos a colación por la recurrente, razón por la cual se denegará el recurso de reposición que ha sido materia de estudio.

Por último, se deniega el recurso de alzada, debido a que nos encontramos frente a un proceso de mínima cuantía y por ende de única instancia.

Con apoyo en las consideraciones expuestas el JUZGADO OCHENTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÀ (Convertido en Juzgado 63 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple).

RESUELVE:

1.- **NO REPONER** el auto de fecha 16 de octubre de 2020 (fl. 44), por las razones indicadas en la parte considerativa de este proveído.

2.- Denegar el recurso de apelación por lo brevemente expuesto en precedencia.

NOTIFÍQUESE



ERIKA MARITZA MÉNDEZ ACERO
Juez

JUZGADO OCHENTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, D.C
(Convertido en Juzgado 63 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple

La anterior providencia se notifica por estado No. 42 del 17 de noviembre de 2020, fijado en la Secretaría a las 8:00 A.M

LEONARDO LARROTA MEZA
Secretario

DLO